

Naciones Unidas  
**ASAMBLEA  
GENERAL**

NOVENO PERIODO DE SESIONES  
Documentos Oficiales



**SEXTA COMISION, 428a.**

SESION

**Jueves 25 de noviembre de 1954,  
a las 11 horas**

**Nueva York**

**SUMARIO**

	<i>Página</i>
Tema 50 del programa:	
Jurisdicción penal internacional: informe de la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional (1953) (continuación) .....	157

**Presidente: Sr. Francisco V. GARCIA AMADOR**  
(Cuba).

**TEMA 50 DEL PROGRAMA**

**Jurisdicción penal internacional: informe de la  
Comisión de Jurisdicción Penal Internacional  
(1953) (A/2645, A/C.6/L.340) (continua-  
ción)**

**DEBATE GENERAL (continuación)**

1. El Sr. AMADO (Brasil) dice que su delegación continúa creyendo que aun no es posible crear una corte penal internacional que pueda funcionar eficazmente, opinión que también sostuvo en su carácter de miembro de la Comisión de Derecho Internacional.
2. A pesar de su cuidadoso y valioso estudio sobre las dificultades teóricas y prácticas del problema, la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional (1953) no pudo llegar a una solución. No ha de culparse por ello a la Comisión de 1953, ya que, en realidad, una solución resulta imposible mientras no se logre mayor progreso en las relaciones internacionales y en el derecho internacional.
3. El Sr. Amado dice que le ha impresionado el peso de los argumentos aducidos en contra de la creación de una corte penal internacional (A/2645, párr. 17). Se ha declarado que una jurisdicción penal internacional sobre las personas no se ajustaría al sistema de derecho internacional existente que se basa en las relaciones entre los Estados y sería incompatible con la estructura de las Naciones Unidas. La corte sólo podría funcionar eficazmente si los Estados estuvieran dispuestos a renunciar a una parte de su soberanía, y por el momento tal renuncia parece sumamente improbable. Además, la creación de la corte, antes de definir el derecho que habría de aplicar en convenciones de general aceptación, no sólo sería inoportuna sino que resultaría contraria al principio de la universalidad en la represión de delitos tales como la piratería y a los tratados de extradición vigentes. El representante del Reino Unido señaló (426a. sesión) las muchas dificultades de carácter técnico y práctico a que tendría que hacer frente la corte. Los Estados han demostrado su renuencia a someter sus controversias a la Corte Internacional de Justicia; y estarán mucho más renuentes a someter a sus nacionales a la jurisdicción de una corte penal internacional.
4. Los argumentos en favor de la creación de la corte (A/2645, párr. 18) son extremadamente endebles. Los

Tribunales de Nuremberg y Tokio, que fueron tribunales *ad hoc*, y el caso de la jurisdicción sobre delitos económicos en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero no son, como se pretende, precedentes válidos. En la Comisión de Derecho Internacional el Sr. Amado señaló anteriormente que los Tribunales de Nuremberg y Tokio pudieron funcionar y que sus sentencias fueron ejecutadas porque las potencias aliadas tenían, gracias a su victoria absoluta, el mismo poder soberano para ejecutar las sentencias que una corte penal nacional. En cuanto a la jurisdicción económica regional, las actuales relaciones económicas entre los seis países de la Comunidad no pueden compararse con las relaciones políticas que existen actualmente entre todos los Estados del mundo.

5. La Comisión de 1953 no pudo responder a dos cuestiones básicas planteadas en el séptimo período de sesiones de la Asamblea General: la de la competencia de la corte penal internacional y la de la asistencia que habrían de prestarle los Estados. En el proyecto de estatuto revisado, así como en el proyecto elaborado por la Comisión de Ginebra, ambas cuestiones quedan pendientes para ser resueltas posteriormente por los Estados con arreglo a un procedimiento determinado. Al proceder así para tratar de hacer el proyecto más fácilmente aceptable, la Comisión de 1953 simplemente aplazó el problema hasta una etapa ulterior y es poco probable que, en lo futuro, los Estados estén más dispuestos que en la actualidad a contraer compromisos necesarios. Por estas razones la delegación del Brasil apoyará el proyecto de resolución de Venezuela (A/C.6/L.340).

6. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) presenta el proyecto de resolución que figura en el documento A/C.6/L.340 y manifiesta que los dos primeros párrafos del preámbulo se explican por sí mismos y no necesitan comentario alguno. En el tercero se destaca el hecho de que el examen de la cuestión de la definición de la agresión y del proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad ha sido aplazado hasta el undécimo período de sesiones de la Asamblea General.

7. El cuarto párrafo del preámbulo es el más importante. Es necesario tener en cuenta el curso probable de los acontecimientos. Tal vez algunas delegaciones puedan creer que la definición de la agresión presentada por la Comisión Especial para la Cuestión de la Definición de la Agresión de 1956 será aprobada inmediatamente y adaptada al código y que la cuestión de la jurisdicción penal internacional quedará entonces resuelta de un día para otro. Desgraciadamente esa conjetura resulta demasiado optimista. La definición de la agresión recomendada por la Comisión Especial puede ser muy extensa y exigir un debate prolongado. Además, podría ocurrir que la Sexta Comisión decida finalmente adoptar dos definiciones: una política, que sirva de guía a los órganos políticos, y otra jurídica que

se incorporaría al código. Una simple declaración general de principios rectores sería tan inadecuada en un código como una definición general de homicidio en un código penal interno.

8. Es muy probable que la Asamblea General confíe a la Comisión de Derecho Internacional la tarea de incorporar al código la definición definitiva de agresión. La Comisión transmitiría luego el resultado de su trabajo a los gobiernos, los que revisarían el nuevo texto. Esto sería necesario, porque ha de darse tiempo a los gobiernos para estudiar el código y considerar los efectos que éste ha de ejercer sobre la cuestión de la jurisdicción penal internacional. Aun cuando la Asamblea General aprobara la definición de agresión y el proyecto de código en el mismo período de sesiones, sería poco aconsejable proceder a estudiar de inmediato la cuestión de la jurisdicción. La cuestión de la corte penal internacional es de primordial importancia, y deben tomarse todas las precauciones posibles para evitar una decisión precipitada. Sólo será posible formar opiniones definitivas después que el estudio del código haya revelado exactamente qué delitos ha de juzgar la corte. Es imperativo, por consiguiente, que después que la Asamblea General haya examinado el informe de la Comisión Especial y el proyecto de código, transcurra cierto tiempo antes de reanudar el estudio de la cuestión de la jurisdicción. Además, si volvieran a incluirse los tres temas en el programa de un mismo período de sesiones, podría con ello desviarse la atención de la Comisión de otras cuestiones importantes.

9. El primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución se justifica porque la Comisión de 1953 ha sido un organismo especial, en el cual no sólo cada uno de sus miembros sino también los gobiernos interesados dedicaron mucho tiempo y muchos esfuerzos. La redacción de dicho párrafo deliberadamente excluye comentarios sobre la calidad del trabajo realizado y no se ha tenido la intención de atribuirle ningún significado especial. En el párrafo 2 de la parte dispositiva se prevé un período de gracia que, como explicó el Sr. Pérez Perozo en la sesión precedente, se necesitará después que la definición de la agresión y el proyecto de código hayan sido examinados.

10. El Sr. ROLING (Países Bajos) desea aclarar algunos equívocos que se han producido en el curso del debate sobre el tema anterior del programa de la Comisión. En la declaración formulada en la 424a. sesión no tuvo el propósito de equiparar el hecho de ajusticiar a doce culpables con la matanza de más de doce millones de seres humanos inocentes; expuso que su opinión era — y sigue siendo — que el empeño despiadado y el absoluto desprecio por la justicia con que un Estado criminal trató de obtener su propio provecho, encontraron paralelo en la aplicación despiadada de la justicia por las Potencias acusadoras, que por completo hicieron caso omiso de las normas jurídicas relativas a la soberanía del Estado. También se ha interpretado mal su declaración de que si los juicios de Nuremberg no marcaran una etapa en el derecho internacional serían algo siniestro. No puede haber duda alguna de que las personas condenadas en esos juicios habían merecido su destino; pero los juicios establecieron el precedente de que los vencedores en una guerra tienen derecho a dictar nuevas leyes basadas en la conciencia de la humanidad. A menos que la ley así establecida sea obligatoria en lo futuro, el precedente de Nuremberg sólo ser-

virá de pretexto a todo vencedor para inventar una nueva ley obligatoria para el vencido pero no para sí mismo. Y esto sería realmente siniestro.

11. En opinión del orador, parece indiscutible la necesidad de codificar los principios jurídicos de Nuremberg, que representan una revolución; pero existe el peligro de que esa revolución sea traicionada por las Naciones Unidas. En el curso del debate sobre el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, el representante de los Estados Unidos, en particular, declaró que la elaboración del código en este momento no era ni posible ni oportuna debido a las diferencias de opinión que separan a los gobiernos, especialmente respecto al alcance de sus obligaciones conforme al derecho internacional (415a. sesión). Ya que el propósito de la codificación es precisamente eliminar cualquier duda sobre el alcance de dichas obligaciones, el Sr. Röling sólo puede conjeturar que los Estados Unidos no están dispuestos a reafirmar el derecho de Nuremberg en medio de la guerra fría. Esta actitud de una gran nación, que actúa de buena fe, parece incomprensible.

12. Si bien la codificación del derecho de Nuremberg es una consecuencia necesaria de los juicios de Nuremberg y de Tokio, la creación de una corte penal internacional permanente no es necesaria, estrictamente hablando. El derecho penal internacional puede ser aplicado por los tribunales nacionales o por tribunales internacionales *ad hoc*; pero ambos tienen sus inconvenientes. Los tribunales nacionales no pueden imponer sanciones por delitos en que estén implicados los gobiernos nacionales, y tales delitos forman gran parte del proyecto de código; por otra parte, podrían no ser completamente imparciales al juzgar a las personas que puedan caer bajo su jurisdicción. Las cortes penales internacionales *ad hoc* adolecen de las deficiencias inherentes a un tribunal de esta índole y por las cuales se ha criticado a los tribunales de Nuremberg y Tokio.

13. Además, un corte penal internacional permanente, como producto de una comunidad internacional imperfecta, tendrá evidentemente sus imperfecciones. Algunos de los miembros de la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional (1953) estimaron que de no ser posible crear una corte dotada de estabilidad, permanencia, independencia, eficacia y universalidad era mejor no crear corte alguna, ya que sería inútil, por no decir peligroso, crear una corte de calidad inferior. La delegación de los Países Bajos se suma a los miembros que sostuvieron que insistir en la perfección en la actual etapa primitiva de las relaciones internacionales es olvidar la realidad y que, puesto que todas las instituciones jurídicas necesitan tiempo para desarrollarse, conviene crear una corte, por modesta que sea, y darle una oportunidad de desarrollarse.

14. La comparación que se hace con frecuencia entre las instituciones jurídicas nacionales y las propuestas instituciones jurídicas internacionales no siempre es justificada. En derecho penal sería más justo comparar la actual situación internacional con los sistemas nacionales europeos de hace mil años, cuando el orden jurídico vigente en el interior de un Estado aun no se apoyaba en un poder central indiscutido. Una corte penal creada en el siglo XII en Islandia, por ejemplo, donde existían poderosas familias nobles casi soberanas, fué al principio impotente contra los poderosos y sólo pudo aplicar la ley contra los débiles; pero constituyó, sin embargo, un punto de partida para el desa-

rollo de la ley y el orden. Una corte penal internacional creada hoy sería igualmente imperfecta; pero también allí puede comenzar la evolución de la idea de una jurisdicción penal que al final logre triunfar contra la mera fuerza. Lo importante es sentar los cimientos.

15. La jurisdicción penal internacional sobre las personas está en una etapa de desarrollo aun más rudimentaria que la jurisdicción similar sobre los Estados. En la actualidad sólo funciona en el plano regional, en el cual las diferencias de intereses no son tan grandes como en el plano mundial; y, como ocurre en el caso de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, se refiere sólo a cuestiones muy circunscritas. No existe aún ninguna corte mundial permanente para juzgar a los individuos por delitos internacionales. Los tribunales *ad hoc* establecidos en Nuremberg y en Tokio por los vencedores en una lucha por el poder, han sido severamente criticados por su parcialidad y porque sólo los vencidos fueron sometidos a juicio.

16. En la actualidad no sería posible facultar ni siquiera a la corte penal internacional propuesta para juzgar tanto a vencidos como a vencedores. A falta de un Estado mundial, tampoco podría conferírsele jurisdicción obligatoria. Muchos Estados todavía se oponen a la idea misma de la jurisdicción penal internacional y la URSS, por ejemplo, sostiene que dicha jurisdicción viola la soberanía de los Estados. Algunas de las razones por las cuales se consideran incompatibles estos dos conceptos son las siguientes: 1) Una de las funciones de un Estado soberano es proteger a sus nacionales contra las potencias extranjeras y, por consiguiente, no puede permitir que sean juzgados por un tribunal extranjero; 2) las personas juzgadas por una corte penal internacional lo serán ordinariamente por haber ejecutado la política de su propio Estado, y el Estado no querrá correr el riesgo de que su política sea condenada por un organismo dotado de amplios poderes, sino que querrá reservarse el derecho a interpretar sus obligaciones internacionales; 3) la corte tendrá que depender de los Estados interesados para presentar las personas acusadas y las pruebas; y un Estado podría vacilar antes de hacerlo en contra del sentimiento nacional predominante.

17. Por consiguiente, en el momento actual sólo sería posible crear una corte penal internacional sobre una base puramente voluntaria. Como es natural, se plantea la cuestión de si, a pesar de todas estas imperfecciones inevitables, vale la pena crearla. La delegación de los Países Bajos se pronuncia por la afirmativa. La evolución de la jurisdicción penal internacional muestra que las instituciones jurídicas no son perfectas desde el comienzo sino que necesitan tiempo para desarrollarse y alcanzar la perfección. La corte penal internacional se crearía con la esperanza y la confianza de que su desarrollo seguirá un derrotero análogo. Su creación significará la adopción de una jurisprudencia que puede servir de norma para el mundo entero y que dará a la nueva corte una oportunidad para estatuir, aunque sólo sea dentro de límites muy estrechos, en materia de derecho penal internacional, con lo cual éste cobrará fuerza.

18. Por el tenor del presente debate y por las medidas tomadas respecto al proyecto de código de delitos es evidente que se aplazará el debate sobre la jurisdicción penal internacional. El Gobierno de los Países Bajos quiere dejar constancia de que apoya la creación

de una corte penal internacional dentro de la estructura de las Naciones Unidas.

19. El Sr. SPIROPOULOS (Grecia) hace un elogio de la Comisión de 1953 y de su relator por los esfuerzos realizados. La delegación de Grecia apoya plenamente las observaciones de la delegación de Francia sobre la jurisdicción penal internacional (427a. sesión). Comparte también los temores expresados por los representantes del Reino Unido y el Brasil respecto a que podría ser poco prudente embarcarse en un proyecto de tal magnitud mientras no se haya creado un ambiente más propicio.

20. Por estas razones, la delegación de Grecia apoyará el proyecto de resolución de Venezuela (A/C.6/L.340).

21. Sin embargo, como inevitablemente habrá de incluirse en el código de delitos una definición de la agresión, cree posible suprimir las palabras: "... el informe de la nueva Comisión Especial para la cuestión de la definición de la agresión y...", que figuran en el segundo párrafo de la parte dispositiva. En segundo lugar, no es muy claro el significado de los términos: "haya considerado" que figuran en el mismo párrafo. El texto podría resultar más claro si dicho término fuese reemplazado por la palabra "apruebe".

22. El Sr. BRUNER (Yugoeslavia) recuerda que la opinión de su delegación sobre todos los aspectos de la cuestión de la jurisdicción penal internacional fué expuesta en detalle tanto en el séptimo período de sesiones de la Asamblea General como en la Comisión de 1953. La delegación de Yugoeslavia continúa sosteniendo los mismos puntos de vista y cree que la situación general internacional no justifica un examen precipitado del problema. Su participación en los trabajos de la Comisión de 1953 en modo alguno comprometió a Yugoeslavia, y la delegación de este país concuerda con quienes desean aplazar el examen del tema hasta una fecha ulterior cuando pueda ser más favorable la situación para un fructífero examen de la cuestión.

23. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) conviene en que la supresión propuesta por el representante de Grecia eliminará una frase redundante. En su primera declaración (426a. sesión), manifestó que no era necesario referirse nuevamente a la definición de la agresión. La frase sólo se incluyó en razón de la importancia que atribuyeron a esta cuestión algunos representantes, especialmente el del Canadá, en la 427a. sesión.

24. En cuanto a la segunda modificación propuesta por el representante de Grecia, la delegación de Venezuela quiso ajustarse a la redacción empleada en el proyecto de resolución en virtud del cual se aplaza el examen del proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. Si "haya considerado" se reemplazara por el término "apruebe" podría acusarse a su delegación de tratar de aplazar el examen de la cuestión indefinidamente. Además, el código de delitos podría ser aprobado, no por la Asamblea General sino por una conferencia de plenipotenciarios. Por estas razones parece preferible el texto actual; pero su delegación no se opondrá a la segunda enmienda propuesta por el representante de Grecia si la mayoría de la Comisión la considera conveniente.

25. Sir Gerald FITZMAURICE (Reino Unido) confía en que la Comisión mantendrá la expresión “haya considerado” que figura en el párrafo 2 del proyecto de resolución. Si se utilizara en su lugar la palabra “apruebe” la Comisión estaría prejuzgando la actitud

de la Asamblea General, que en realidad podría decidir no aprobar el código o no convocar a una conferencia para preparar una convención al respecto.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.